

NACIONES UNIDAS

Asamblea General



QUINCUAGÉSIMO PERÍODO DE SESIONES

Documentos Oficiales

SEXTA COMISIÓN
12ª sesión
celebrada el jueves
12 de octubre de 1995
a las 15.00 horas
Nueva York

ACTA RESUMIDA DE LA 12ª SESIÓN

Presidente: Sr. LEHMANN (Dinamarca)

SUMARIO

TEMA 141 DEL PROGRAMA: INFORME DE LA COMISIÓN DE DERECHO INTERNACIONAL SOBRE LA
LABOR REALIZADA EN SU 47º PERÍODO DE SESIONES

La presente acta está sujeta a correcciones. Dichas correcciones deberán enviarse, con la firma de un miembro de la delegación interesada, y *dentro del plazo de una semana a contar de la fecha de publicación*, a la Jefa de la Sección de Edición de Documentos Oficiales, oficina DC2-794, 2 United Nations Plaza, e incorporarse en un ejemplar del acta.

Las correcciones se publicarán después de la clausura del período de sesiones, en un documento separado para cada Comisión.

Distr. GENERAL
A/C.6/50/SR.12
22 de diciembre de 1995
ESPAÑOL
ORIGINAL: FRANCÉS

Se declara abierta la sesión a las 15.00 horas.

TEMA 141 DEL PROGRAMA: INFORME DE LA COMISIÓN DE DERECHO INTERNACIONAL SOBRE LA LABOR REALIZADA EN SU 47º PERÍODO DE SESIONES (A/50/10 y A/50/402)

1. El PRESIDENTE invita al Presidente de la Comisión de Derecho Internacional (CDI) a presentar el informe de la Comisión.

2. El Sr. RAO (Presidente de la Comisión de Derecho Internacional) rinde homenaje a dos publicistas eminentes fallecidos recientemente, el Sr. Roberto Ago y la Sra. Suzanne Bastid. El primero, ex miembro de la Corte Internacional de Justicia, realizó una importante contribución al estudio de la responsabilidad de los Estados cuando era Relator Especial de la Comisión de Derecho Internacional para este tema. La segunda, destacada jurista francesa, unía las más altas condiciones humanas a un notable conocimiento del derecho internacional.

3. Al presentar el informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su 47º período de sesiones (A/50/10), el Presidente de la CDI expresa que actualmente la Comisión está estudiando cinco temas. En estos momentos se ha avanzado bastante en el examen del tema titulado "Proyecto de código de crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad" y la CDI espera terminar la segunda lectura antes de que finalice su próximo período de sesiones. Asimismo, tras varios años de labor exhaustiva, la primera lectura del tema relativo a la responsabilidad de los Estados debería completarse antes del término del próximo período de sesiones. Por lo que respecta al código de crímenes, en su último período de sesiones la Comisión examinó una lista de crímenes que se incluirían en el código. Resolvió dar prioridad a la elaboración de las disposiciones relativas a cuatro crímenes, a saber, la agresión, el genocidio, las violaciones sistemáticas o masivas de los derechos humanos y los crímenes de guerra excepcionalmente graves. Asimismo, decidió que, al elaborar los artículos pertinentes, el Comité de Redacción tuviera presentes todos o parte de los elementos de los proyectos de artículo aprobados en primera lectura sobre la intervención, la dominación colonial y otras formas de dominación extranjera, el apartheid, los crímenes relacionados con los mercenarios y el terrorismo. Asimismo, en su próximo período de sesiones la CDI deberá pronunciarse sobre otros crímenes. Por otra parte, siempre en relación con el proyecto de código de crímenes, el Comité de Redacción dio el último toque a algunos artículos que se presentarán el año próximo junto con los artículos que deben aprobarse en sesión plenaria.

4. Por lo que respecta a la responsabilidad de los Estados, la CDI examinó las consecuencias jurídicas de los actos internacionalmente ilícitos tipificados como crímenes. Además, terminó de elaborar dos artículos (13 y 14) relativos a las contramedidas y las observaciones pertinentes, titulados "Proporcionalidad" y "Contramedidas prohibidas", respectivamente. Asimismo, dentro del marco de la tercera parte del proyecto y de su anexo, aprobó proyectos de artículos y comentarios sobre la solución de controversias.

5. En cuanto a las consecuencias de los crímenes, la CDI examinó la propuesta de subordinar el derecho de la comunidad internacional y de los Estados directamente afectados de reaccionar ante un crimen a la comprobación previa del

/...

hecho ilícito, en primer lugar por la Organización de las Naciones Unidas, que se pronunciaría respecto de la existencia del crimen y lo imputaría a un Estado, y en segundo lugar, por la Corte Internacional de Justicia, que resolvería en última instancia. Los puntos de vista expresados al respecto revelaron que aún no se ha llegado a consenso.

6. En cuanto a la responsabilidad internacional, el Presidente de la CDI recuerda que, hasta ahora, ésta ha elaborado siete artículos con los comentarios pertinentes, sobre el concepto de prevención. En su último período de sesiones, avanzó aún más y elaboró otros cuatro artículos, a saber, el artículo A, relativo a la libertad de acción del Estado y sus límites, el artículo B, relativo a la obligación de prevención y al concepto de diligencia, el artículo C, relativo a la responsabilidad y la reparación, y el artículo D, relativo a la cooperación y a la ayuda de las organizaciones internacionales competentes. Además, la CDI examinó propuestas relativas a la definición del daño ambiental. Así, examinó a título preliminar una propuesta encaminada a definir este daño en forma restrictiva a los efectos de la responsabilidad. La CDI confía en que los progresos así realizados le permitan terminar la primera lectura de los distintos proyectos de artículo relativos a la prevención.

7. La CDI también llevó a cabo la labor preliminar sobre el tema titulado "La ley y la práctica en materia de reservas a los tratados" y el tema titulado "La sucesión de Estados y sus efectos sobre la nacionalidad de las personas naturales y jurídicas", lo que le permitió hacer un inventario de las cuestiones que tendría que examinar y precisar la orientación que habría de dar a sus trabajos futuros sobre estos temas. Además la Comisión decidió con sujeción a la aprobación de la Asamblea General incluir en su programa el tema "Protección diplomática" e iniciar un estudio de viabilidad, sobre otro tema, a saber "Derechos y obligaciones de los Estados en lo que respecta a la protección al medio ambiente humano".

8. Por lo que respecta al informe en estudio (A/50/10), el Presidente de la CDI señala que, teniendo presente la forma en que la Comisión se propone examinarlo, presentará primero los capítulos II, relativo al Código de Crímenes, IV, a la responsabilidad de los Estados y V, a la responsabilidad por las consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho internacional. En segundo lugar, presentará los capítulos III, relativo a la sucesión de Estados, VI, a las reservas a los tratados y VII, a las demás decisiones y recomendaciones de la Comisión.

9. Con respecto al capítulo II, relativo al código de crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad, el Sr. Rao subraya que la elaboración de un proyecto de código adquiere mayor importancia en vista de los graves crímenes que se cometen en diversas regiones del mundo. El código debe ser lo bastante preciso como para cumplir con el principio nullum crimen, nulla poena sine lege. Además, su elaboración plantea enormes dificultades políticas y jurídicas. En su último período de sesiones, el Relator Especial sobre el tema presentó su 13º informe en el cual recomendaba que sólo se incluyeran en el código seis de los 12 crímenes aprobados en primera lectura, a saber, la agresión (art. 15), el genocidio (art. 19), las violaciones sistemáticas o masivas de los derechos humanos (art. 21), los crímenes de guerra excepcionalmente graves (art. 22), el terrorismo internacional (art. 24) y el tráfico ilícito de estupefacientes (art. 25). Los otros seis crímenes, que el Relator Especial proponía no

conservar, teniendo en cuenta las críticas y reservas que habían suscitado en diversos gobiernos, eran la amenaza de agresión (art. 16), la intervención (art. 17), la dominación colonial y otras formas de dominación extrajera (art. 18), el apartheid (art. 20), el reclutamiento, utilización, financiación y entrenamiento de mercenarios (art. 23), y los daños intencionales y graves al medio ambiente (art. 26). Además en su informe anterior el Relator Especial había manifestado su intención de limitar la lista de crímenes a aquéllos cuya inclusión en el Código recibiría amplio apoyo.

10. Algunos miembros de la CDI expresaron su complacencia por el hecho de que la lista de crímenes se hubiese abreviado y porque de ahora en adelante se limitara a los comportamientos que implicaran una amenaza grave e inmediata contra la paz y la seguridad de la humanidad. Conviene limitarse a los crímenes sancionados con arreglo al derecho internacional. A su juicio, no es necesario incluir en el proyecto de código los crímenes que solo tienen importancia histórica. En cambio, otros miembros estimaron que la lista de crímenes no debía reducirse puesto que un código que las enumerara en forma exhaustiva contribuiría mejor a fortalecer el derecho internacional y la paz y la seguridad internacionales. Señalaron que algunos de los crímenes excluidos se definen en instrumentos internacionales y reúnen todos los requisitos necesarios para incluirse en el código. Asimismo, observaron que la aplicación de un enfoque restrictivo no haría necesariamente más aceptable el código, ni las posibilidades de llegar a un consenso al respecto.

11. Por lo que se refiere a la agresión, el debate reveló una amplia convergencia de puntos de vista tanto en cuanto a que la agresión es el crimen contra la paz y la seguridad de la humanidad por excelencia, como en lo que respecta a lo difícil que resulta elaborar una definición lo suficientemente precisa de la agresión a los efectos de la responsabilidad penal individual. Al respecto, algunos miembros fueron de opinión de que la definición aprobada en primera lectura, basada en la resolución 33/14 (XXIX) de la Asamblea General, debe adaptarse a la finalidad del código. En esta materia, el Presidente de la CDI entiende que el Comité Especial sobre el establecimiento de una corte penal internacional que acaba de reunirse en Nueva York y cuyo informe ha de ser examinado próximamente por la Sexta Comisión también se ha ocupado del problema.

12. Si bien es cierto que la propuesta de suprimir la amenaza de agresión de la lista de crímenes sancionados por el código recibió amplio apoyo, hubo opiniones divergentes sobre la conveniencia de eliminar de la lista el crimen de intervención. Pese a reconocer la importancia de la no intervención como principio fundamental de derecho internacional contemporáneo, algunos miembros estimaron que el concepto es demasiado vago y carece del rigor requerido por el derecho penal. Otros miembros se pronunciaron por conservarlo en el código, e hicieron hincapié en que la intervención había ocasionado y seguía ocasionando sufrimientos a millones de personas desamparadas y reunía todos los requisitos necesarios para ser incluida en un código de crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad.

13. Las opiniones respecto de la supresión del crimen de dominación colonial y otras formas de dominación extranjera estuvieron divididas. Para algunos miembros, este crimen ha perdido actualidad y es difícil de definir; en cambio para otros se trata de fenómenos de gran importancia histórica relacionados con los derechos de los pueblos y, en consecuencia, deben conservarse en el código.

14. Mientras que los miembros de la CDI fueron casi unánimemente partidarios de incluir el genocidio en la lista de crímenes contemplados en el código, con el apartheid no sucedió lo mismo. Los que estimaban que este crimen no debería incluirse en el código subrayaron que en Sudáfrica la práctica se había abolido y que nada demostraba que siguiera existiendo en otros lugares. En cambio, se observó que es peligroso olvidar las lecciones de la historia, minimizar la gravedad de las consecuencias del apartheid y pasar por alto numerosas decisiones de los órganos competentes de las Naciones Unidas. Se puso de relieve que el criterio que debe imperar para incluir un crimen en el código debe ser su gravedad y no la probabilidad de que se haya cometido.

15. A juicio de la mayoría de los miembros de la CDI, las violaciones sistemáticas o masivas de los derechos humanos o, para utilizar la expresión propuesta por el Relator Especial, los "crímenes contra la humanidad", deben mantenerse en el código. Sin embargo, lo más importante es determinar en qué punto las violaciones de los derechos humanos, que son fundamentalmente un asunto que compete a los tribunales nacionales, adquiere una dimensión internacional que pone en juego la jurisdicción internacional. El requisito previsto en el artículo aprobado en primera lectura, según el cual las violaciones deben ser masivas para que sean un crimen en virtud del código suscitó opiniones divergentes en el seno de la CDI, como también la propuesta del Relator Especial de considerar que el código incluye además de las personas que actúan en calidad de agentes o representantes de un Estado, a quienes actúan a título personal.

16. Por lo que respecta a los crímenes de guerra excepcionalmente graves, los miembros de la CDI consideraron casi unánimemente que deberían incluirse en el código, pero se han seguido discutiendo las consecuencias que tiene desde el punto de vista del derecho humanitario positivo distinguir entre crímenes de guerra y crímenes de guerra excepcionalmente graves.

17. La CDI también se mostró dividida en cuanto a la recomendación de excluir de la lista de crímenes el reclutamiento, utilización, financiación y entrenamiento de mercenarios. Para algunos miembros, el número limitado de Estados que han aceptado la convención existente sobre la materia y la posibilidad de perseguir los actos en cuestión como actos de terrorismo internacional o, en la medida en que hayan participado en ellos agentes del Estado, como crímenes vinculados a la agresión, justifican su exclusión de la lista de crímenes. En cambio, otros miembros fueron de opinión de que este crimen constituye una amenaza a la soberanía y a la integridad territorial de los Estados pequeños y débiles.

18. Por lo que se refiere al terrorismo internacional, un grupo de miembros estimó que debía suprimirse de la lista de crímenes debido a que el concepto no puede definirse con la precisión que exige el derecho penal y que, de todas formas, el problema ya ha sido abordado en una multiplicidad de instrumentos internacionales relacionados con determinados aspectos del terrorismo. Asimismo, se debatió si había que distinguir entre los actos de terrorismo más graves, que se contemplarían en el código, y los demás actos de terrorismo que quedarían excluidos, y sobre la base de qué criterios. Otra cuestión es determinar si los actos de terrorismo deberían incluirse en el código únicamente cuando sean cometidos por un agente o un representante del Estado, puesto que en

su estado actual, el código solamente contempla la responsabilidad penal individual.

19. También hubo opiniones divergentes respecto del tráfico ilícito de estupefacientes. A juicio de algunos miembros, se trata de una amenaza a la supervivencia de la humanidad, y el "narcoterrorismo" tiene un efecto desestabilizador en los Estados pequeños y constituye un peligro por sus vinculaciones con el terrorismo y la subversión. En opinión de otros, el tráfico ilícito de estupefacientes es reprimido eficazmente por los instrumentos en vigor y la cooperación internacional brinda los medios para eliminar este flagelo ya que, en la mayoría de los casos, es posible perseguir judicialmente a los traficantes ante los tribunales nacionales.

20. La tipificación de los daños intencionales y graves al medio ambiente también suscitó controversia en la CDI. Algunos miembros fueron contrarios a hacerlo y subrayaron que el código no pretendía abarcar todos los crímenes de derecho internacional cometidos por particulares sino sólo los que amenazaran la paz y la seguridad de la humanidad. Subrayaron que el hecho de que no se incluyera un determinado comportamiento en la lista de crímenes sancionados por el código no se oponía a su calificación como crimen sancionable en derecho. Otros miembros opinaron que algunos tipos de daños al medio ambiente como la detonación de explosivos nucleares o la contaminación de ríos enteros deben acarrear la responsabilidad penal individual de sus autores, en especial porque está en juego el porvenir de las generaciones futuras.

21. Al término del debate, la CDI resolvió devolver al Comité de Redacción cuatro de los proyectos de artículo aprobados en primera lectura, a saber, los proyectos de artículo 15 (agresión), 19 (genocidio), 21 (violaciones masivas o sistemáticas de los derechos humanos) y 22 (crímenes de guerra excepcionalmente graves), a fin de que los examinara con carácter prioritario en segunda lectura, a la luz de las propuestas contenidas en el 13º informe del Relator Especial y de las observaciones y propuestas formuladas durante el debate en sesión plenaria, en el entendimiento de que tras su examen, la CDI las tendría en cuenta y trataría discrecionalmente todos o parte de los elementos de cinco otros proyectos de artículo aprobados en primera lectura, a saber los proyectos de artículo 17 (la intervención), 18 (la dominación colonial y otras formas de dominación extranjera), 20 (El apartheid), 23 (el reclutamiento, utilización, financiación y entrenamiento de mercenarios), y 24 (El terrorismo internacional). Además, la CDI decidió aguardar hasta su período de sesiones siguiente antes de adoptar una decisión definitiva respecto del tráfico ilícito de estupefacientes y de los daños internacionales y graves al medio ambiente.

22. El Comité de Redacción logró avances apreciables respecto de una serie de artículos de la primera parte del proyecto de código, a saber, los artículos 1, 5, 5 bis, 6, 6 bis, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Por lo que respecta a la segunda parte, aprobó los textos relativos a la agresión y el genocidio. Tras observar que los resultados de la labor del Comité de Redacción eran transitorios debido a que algunos artículos podían requerir una revisión, la CDI decidió aplazar la aprobación de los textos propuestos por el Comité de Redacción y limitarse por el momento a tomar nota del informe de su Presidente.

23. Por lo que respecta al capítulo IV del informe, relativo a la responsabilidad de los Estados, la CDI examinó tres aspectos del tema.

/...

En primer lugar, se ocupó de la cuestión de las consecuencias jurídicas de los hechos internacionalmente ilícitos calificados de crímenes en virtud del artículo 19 de la primera parte del proyecto de artículos, aprobado en primera lectura. El séptimo informe del Relator Especial trataba, por una parte, de las consecuencias especiales o complementarias que había que atribuir a los hechos internacionalmente ilícitos calificados de "crímenes" y, por la otra, del mecanismo que permitía hacer efectivas esas consecuencias. Al presentar el informe, el Relator Especial indicó que ambos aspectos requerían un esfuerzo bastante serio de desarrollo progresivo.

24. En cuanto a las consecuencias sustantivas de los crímenes, el Relator llegó a la conclusión de que las obligaciones enunciadas en los artículos 6 (Cesación), 6 bis (Reparación) y 8 (Indemnización) eran de incumbencia del autor de un crimen en las mismas condiciones que del autor de un delito, y que la única diferencia era que, en el caso de los crímenes, todos los Estados eran Estados lesionados mientras que en el de los delitos, sólo era así cuando la obligación violada era una obligación erga omnes. Por lo que respecta a la restitución en especie y a la indemnización, el Relator Especial fue de opinión de que en el caso de los crímenes las obligaciones debían constituir una carga más pesada que en el de los delitos. En cuanto a las consecuencias instrumentales de los crímenes, el Relator Especial observó que no podían sino agravarse en relación con las de los delitos, no solamente porque en el caso de los crímenes todos los Estados son Estados lesionados y, como tales, tienen derecho a recurrir a contramedidas, sino también porque en el caso de los delitos, tal vez no sean aplicables las limitaciones a la libertad de acción que se imponen a los Estados cuando se trata de crímenes. Por lo que se refiere al aspecto institucional de las consecuencias de los crímenes, el Relator Especial propuso un procedimiento en dos etapas de acuerdo con el cual la Asamblea General o el Consejo de Seguridad realizaría una evaluación política preliminar antes de que la Corte Internacional de Justicia fuese llamada a pronunciarse sobre la existencia de un crimen internacional y su imputación.

25. Como bien sabe la Sexta Comisión, el concepto mismo de crimen que subyace el séptimo informe del Relator Especial ha sido fuente de animados debates desde que la Comisión de Derecho Internacional la adoptó en 1976. Los párrafos 253 a 269 del informe en estudio reseñan los distintos puntos de vista expresados en la CDI sobre la base jurídica del concepto y su utilidad. En opinión de algunos, en el contexto de sus trabajos relativos a la responsabilidad de los Estados, no le corresponde a la CDI imputar algunos crímenes a los Estados. Además de numerosos precedentes en cuyo contexto sólo se conservó la responsabilidad penal individual en el caso de los crímenes, el objetivo principal de los trabajos de la CDI es elaborar un régimen de indemnización y no crear un sistema represivo. Por otra parte, los defensores de este punto de vista estimaron que, al hacerlo, la CDI, en vez de limitarse a las obligaciones secundarias, entraría inevitablemente en el campo de las obligaciones primarias. En consecuencia, a su juicio, debía partir del principio de que hay un continuo que va de las violaciones menores a las muy graves, que afectan a la comunidad internacional en su conjunto y que, en el caso de estas últimas, la solución consiste en asegurar que el proyecto de código garantice una indemnización de la magnitud correspondiente.

26. Según otra opinión, el concepto de crimen está bien establecido en el derecho internacional y tratándose de actos excepcionalmente graves, esta

calificación, con sus dimensiones políticas, morales y jurídicas y su connotación reprobadora y negativa, encuadra perfectamente con las conductas consideradas. Además, los Estados tienen personalidad jurídica y no es nada extraño considerar que pueden cometer crímenes.

27. Las propuestas del Relator Especial, en especial las relativas al aspecto institucional, dieron lugar a un interesante debate que se reseña en los párrafos 282 a 319 del informe en estudio.

28. Si bien algunos miembros de la CDI estuvieron de acuerdo con la orientación general de las propuestas del Relator Especial respecto de las consecuencias sustantivas, otros expresaron dudas sobre su validez dada la necesidad de respetar la soberanía, la independencia y la estabilidad del Estado denominado "delincuente" teniendo presente el Artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas. La noción de restitutio ad integrum, las limitaciones que se proponía imponer a la libertad del Estado autor de elegir su régimen político y la necesidad de proteger las necesidades vitales de la población dieron lugar a prolongados debates. También se discutió la necesidad de que, antes de poder adoptar contramedidas o formular las exigencias pertinentes contra el Estado autor una resolución de la Corte Internacional de Justicia constatará la existencia de un crimen y lo imputara a un Estado. Los miembros de la CDI partidarios de que hubiera un pronunciamiento judicial previo estimaron que este requisito era muy útil para limitar las posibilidades de intimidación y de coerción, e indispensable para promover la equidad y la justicia que exigía el nuevo orden mundial. Por otra parte, algunos miembros insistieron en que el artículo 19 de la primera parte del proyecto tiene vicios redhibitorios y en que un sistema basado en la aceptación del concepto de crimen no tenía ninguna posibilidad de ser ampliamente aceptado por los Estados.

29. Las propuestas del Relator Especial respecto de los artículos 15 a 19 fueron criticadas por considerarse poco realistas, indebidamente complejas y difíciles de aplicar. También se observó que planteaban problemas en relación con la Carta de las Naciones Unidas y que antes de examinarlas debía aguardarse a que la CDI hubiera reexaminado en segunda lectura el concepto de crimen que consagra el artículo 19.

30. En cambio, otros miembros opinaron que el concepto de crimen no es nuevo en derecho internacional y es una buena base para desarrollar el derecho por lo que habrá que examinar seriamente las propuestas del Relator Especial. Por otra parte, se observó que, en vista de que el artículo 19 se había aprobado en primera lectura, la CDI estaba obligada a asumir las consecuencias, como lo proponía el Relator Especial y que sólo así podría ayudarse al Comité de Redacción a avanzar en el cumplimiento de su mandato.

31. Al término del debate, la CDI aprobó por 18 votos contra 6 la recomendación del Relator Especial de que sus propuestas fueran remitidas al Comité de Redacción para que éste las examinara a la luz del debate. Los argumentos en favor y en contra de esta propuesta se resumen claramente en los párrafos 337 y 338 del informe, respectivamente, e indican el camino que aún hay que recorrer antes de poder llegar a un consenso sobre este aspecto del tema.

32. El segundo aspecto del tema de la responsabilidad de los Estados examinado por la CDI en su último período de sesiones se refiere a las consecuencias

instrumentales de los delitos. El Presidente de la CDI recuerda que el año anterior, ésta había aprobado provisionalmente tres artículos al respecto, a saber, los artículos 11, 13 y 14, titulados respectivamente "Contramedidas aplicadas por el Estado lesionado", "Proporcionalidad" y "Contramedidas prohibidas"; el artículo 11 fue aprobado en el entendimiento de que tal vez sería necesario revisarlo a la luz del texto que finalmente se aprobara para el artículo 12. En el mismo período de sesiones, la CDI resolvió no someter estos tres artículos a la Asamblea General mientras no hubiese aprobado el artículo 12 y elaborado los comentarios pertinentes. En su último período de sesiones, la CDI examinó los comentarios a los tres artículos. Por falta de tiempo no examinó el comentario al artículo 11, pero aprobó los comentarios a los artículos 13 y 14, que actualmente tiene ante sí la Sexta Comisión.

33. El artículo 13 se refiere a la proporcionalidad. Establecer la licitud de las contramedidas aplicando el criterio de la proporcionalidad es a no dudarlo una tarea compleja, delicada y que depende de diversos factores relacionados con el contexto. Sin embargo, se estima que teniendo presentes además la gravedad y los efectos de los hechos ilícitos se contribuirá a limitar las posibilidades de abuso. También se propuso que no se aplique este criterio cuando se trate de violaciones de los derechos humanos y de violaciones de las obligaciones erga omnes.

34. El artículo 14 se refiere a las situaciones en que se prohíben las contramedidas. Por lo general, estas prohibiciones, ya se trate de la amenaza o el uso de la fuerza [a)], de medidas extremas de coacción económica o política [b)], de cualquier comportamiento que infrinja la inviolabilidad de los agentes, locales, archivos y documentos diplomáticos o consulares [c)] o de cualquier comportamiento que vulnere los derechos humanos fundamentales, son bien aceptadas. Al respecto el Presidente de la CDI remite a los miembros de la Comisión a la sección C del capítulo IV del informe de la CDI, donde se indica que ésta aún no se ha pronunciado sobre el artículo 12 recomendado por el Comité de Redacción, que ocupa un lugar importante dentro del enfoque del proyecto.

35. El tercer aspecto de la cuestión de la responsabilidad de los Estados es la solución de controversias. Desde el comienzo de sus trabajos, la CDI previó la posibilidad de incluir en el proyecto de artículos una tercera parte consagrada a la solución de controversias. En 1993, el actual Relator Especial sometió a su conocimiento una serie de disposiciones que se incluirían en esta tercera parte, las que se remitieron al Comité de Redacción, como también las propuestas del anterior Relator Especial sobre el tema.

36. En su último período de sesiones, la CDI examinó los resultados de los trabajos del Comité de Redacción, consistentes en una serie de siete artículos acompañados de un anexo (que se transcriben en la sección C del capítulo IV del informe). Aunque los textos recomendados por el Comité de Redacción tuvieron que ser aprobados sometiéndolos a votación, con un solo voto en contra, puede estimarse que reflejan un amplio consenso en el seno de la CDI.

37. El sistema de solución de controversias propuesto por la Comisión se aplica a todas las controversias surgidas de la interpretación o de la aplicación de la futura convención. Es supletorio en cuanto las partes en la controversia pueden recurrir en todo momento, de común acuerdo, a ese sistema o al mecanismo de solución de su elección. Sin embargo, el párrafo 2 del artículo 5 contempla

una excepción importante cuando se trata de controversias surgidas de la adopción de contramedidas en este caso: el Estado respecto del cual se hayan adoptado contramedidas tiene derecho a someter unilateralmente en cualquier momento la controversia a un tribunal arbitral. El artículo 7, relativo a la validez de los laudos arbitrales ha dado lugar a algunas críticas. Mientras que a juicio de algunos miembros era conveniente que se pudiera controlar eficazmente las impugnaciones de la validez del laudo, otros manifestaron su preocupación por el hecho de que estas disposiciones complicaban el proceso de solución. Sin embargo, prevaleció la opinión de los primeros. Al igual que la tercera parte propiamente tal, el anexo, que comprende dos artículos relativos respectivamente a la conciliación y al arbitraje, tiene valor supletorio por cuanto las partes pueden elegir libremente mecanismos diferentes de los que éste contempla. Sin embargo, si las partes no se ponen de acuerdo sobre esta elección, pueden recurrir unilateralmente a un procedimiento de solución por un tercero. Esto significa ante todo que, en caso de una conciliación obligatoria, se deberá constituir necesariamente una comisión de conciliación en virtud del artículo primero del anexo y, segundo, que en caso de un procedimiento de arbitraje se deberá constituir un tribunal arbitral de conformidad con el artículo 2 del anexo.

38. Como se indica en la nota 203, la CDI debe aún examinar el problema de la coexistencia de obligaciones de solución de controversias en virtud de la tercera parte de la futura convención y de obligaciones de esa índole procedentes de otros instrumentos relativos a la solución de controversias. Asimismo, deberá examinar la cuestión de la solución de controversias relativas a actos ilícitos del Estado, de acuerdo con los resultados de su labor en esta esfera. El Presidente de la CDI subraya que se han logrado progresos importantes en el tema de la responsabilidad de los Estados y que, no obstante que las cuestiones en estudio son extremadamente complejas, la CDI espera poder terminar la lectura del proyecto de artículos en su próximo período de sesiones.

39. Por lo que respecta al capítulo V del informe relativo a la responsabilidad internacional por las consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho internacional, en su último período de sesiones la CDI examinó el 11º informe del Relator Especial, que trataba del papel que desempeña el daño en el futuro régimen de responsabilidad y procuraba definir el "medio ambiente". La CDI también examinó un estudio realizado por la Secretaría en cumplimiento de la solicitud formulada por la Asamblea General en el párrafo 5 de su resolución 49/51, de 9 de diciembre de 1994, titulada "Estudio de los regímenes de responsabilidad relacionados con el tema de la responsabilidad internacional por las consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho internacional" (A/CN.4/474).

40. En el debate preliminar sobre los dos últimos informes del Relator Especial, la CDI prestó especial atención a la definición del concepto de daño ambiental. El Relator Especial propuso excluir de la definición partes que se hallaran ya comprendidas en definiciones clásicas del daño, tales como los daños a las personas o a los bienes. Propuso que los "paisajes" se consideraran como "valores" apreciados por la gente y no como componentes del medio ambiente. Varios miembros de la CDI pidieron que se ampliara el concepto de daño ambiental de manera que considerara el factor humano e incluyera los siguientes elementos: pérdida de la vida, lesión personal u otro menoscabo de la salud, pérdidas o daños de los bienes dentro del Estado afectado, así como deterioro de los

recursos naturales y humanos y del medio humano o cultural del Estado afectado. Sin embargo, las deliberaciones se centraron fundamentalmente en el campo de aplicación del futuro instrumento y en la formulación de sus principios básicos.

41. La CDI estableció un Grupo de Trabajo sobre la determinación de actividades peligrosas comprendidas dentro del ámbito de aplicación del tema y de formular recomendaciones al respecto. A la luz del informe del Grupo de Trabajo se convino en que, había que especificar mejor el ámbito de aplicación del futuro instrumento. Esta especificación dependerá de las disposiciones sobre prevención que haya aprobado la Comisión y de la naturaleza de las obligaciones sobre la responsabilidad que la CDI desarrolle. Una manera de lograr esa especificación, sería preparar una lista de actividades mediante un método que la CDI podría recomendar en una etapa ulterior de los trabajos. Sin embargo, la CDI estima que por el momento puede basarse en la lista de actividades enumeradas en las diversas convenciones que tratan de los daños transfronterizos, tales como la Convención de 1991 sobre la evaluación del impacto ambiental en un contexto transfronterizo, la Convención de 1992 sobre los efectos transfronterizos de los accidentes industriales y la Convención de 1993 sobre responsabilidad civil por daños resultantes de actividades peligrosas para el medio ambiente. Volverá a examinar la cuestión de la determinación de las actividades que corresponden al campo de aplicación de los proyectos de artículos cuando haya terminado sus trabajos relativos al concepto de responsabilidad.

42. Por lo que respecta a los principios básicos que deberían orientar a los Estados respecto a las actividades peligrosas, la CDI aprobó cuatro artículos, a saber, A, B, C, y D, cuyo lugar se determinará cuando todos los artículos se hayan aprobado en primera lectura. El artículo A, titulado "La libertad de acción y sus límites", se inspira en el principio 21 de la Declaración de Estocolmo y en el principio 2 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Está enunciado de manera de que reconoce implícitamente la libertad de acción de los Estados al mismo tiempo que fijando sus límites. El artículo B, titulado "Prevención", conjuntamente con el artículo D, constituyen la base teórica de los artículos sobre prevención ya aprobados por la CDI. Define la obligación de los Estados de adoptar medidas como una obligación de observar la diligencia debida, norma con la cual hay que contrastar la conducta de un Estado y que corresponde a lo que generalmente se considera apropiado y proporcional al grado de riesgo de daños transfronterizos en el caso de que se trate. Mientras mayor sea el riesgo que entrañan las actividades, exigen mayor cuidado de parte del Estado al formular políticas y un grado mucho mayor de rigor por parte del Estado para aplicarlas.

43. El artículo C, como lo indica la expresión "de conformidad con los presentes artículos", debe ser la base de los futuros artículos relativos a cuestiones de responsabilidad y reparación. Es una hipótesis de trabajo y, como la Comisión todavía no se ha puesto de acuerdo sobre un régimen específico de responsabilidad, debe entenderse sin perjuicio de que deba determinarse, primero, la entidad que es responsable y debe prestar reparación, segundo, cuáles son las formas y el alcance de la reparación, tercero, cuáles son las características o límites de los daños que dan lugar a reparación y cuarto, cuál es la base o la naturaleza de la responsabilidad. Tras pasar revista a las prácticas existentes, la CDI observó con interés que, en general, el enfoque adoptado es pragmático y no se basa en una teoría coherente de la

responsabilidad. Por lo que respecta al artículo D titulado "Cooperación", extiende el requisito de la cooperación a todas las etapas de la planificación y la aplicación. La expresión "según sea necesario", que se aplica al papel que cumplen las organizaciones internacionales, significa que la asistencia de las organizaciones internacionales puede no ser necesaria si el Estado de origen o el Estado afectado son Estados tecnológicamente avanzados. Además, reconoce que no siempre hay organizaciones que tienen la capacidad necesaria para intervenir en un caso determinado y que, aun cuando existan, sólo pueden actuar de acuerdo con su instrumento de constitución y, en consecuencia, no tienen la obligación de responder a todas las peticiones de asistencia de los Estados.

Se levanta la sesión a las 16.25 horas.